

Los pensadores en la Guerra de la Restauración*

*Roberto Cassá***

Se ha hecho un lugar común que la Guerra de la Restauración iniciada formalmente el 16 de agosto de 1863 fue un hecho inédito de la historia dominicana. Se la ha visualizado de esa forma, desde días después, por oposición al desconocimiento de la población de Santiago de los Caballeros de la segunda administración de Buenaventura Báez el 7 de julio de 1857. Desde los primeros días se argumentó que en 1857 se pronunció un puñado que arrastró al pueblo, mientras que en 1863 fue el pueblo el protagonista que arrastró a la minoría de los capaces. Esto fue retomado por Alejandro Angulo Guridi, tal vez el primer analista sociológico de la gesta iniciada en agosto de 1863. Tenía conocimiento de causa Angulo Guridi porque fue un activo protagonista en 1857, redactor del órgano del gobierno, al tiempo que testigo de lo acontecido durante las

* Miembro de número de la Academia, presidente de la Junta Directiva de la Academia Dominicana de la Historia (2001-2004), y director del Archivo General de la Nación de la República Dominicana.

** Discurso pronunciado el 11 de agosto de 2022, en la Sala de Conferencias Fr. Cipriano de Utrera O.F.M. Cap, con motivo de la Sesión Solemne en conmemoración del 159 aniversario de la Restauración de la República.

primeras semanas en septiembre de 1863 en la misma ciudad de Santiago de los Caballeros, donde continuaba residiendo.

No se pretende ahora glosar las reflexiones fundamentales de Angulo Guridi, uno de los pensadores sobresalientes de la época. Se plantea examinar las expresiones ideológicas que acompañaron a la gesta de la Restauración de la República. Este propósito no se reduce a un requerimiento metodológico. Está en realidad en el núcleo de las características de la guerra de la Restauración.

En efecto, fue una acción del pueblo, pero su eficacia como suprema expresión de la capacidad de resistencia nacional del pueblo se debió al segundo componente apuntado por Angulo Guridi: la sumatoria de la minoría pensante. Esa característica constituyó precisamente la clave distintiva de la gesta. Se trató de una contienda que cobró dimensión nacional gracias a la conducción ejercida por intelectuales constituidos en gobierno. No solo ejercieron las tareas administrativas propias de la autoridad pública en términos modernos: insuflaron la acción de motivaciones y principios. Constituyó lo indispensable para el esfuerzo tremendo de un pueblo pobre de un país pequeño contra una potencia europea, aunque estuviera relegada a segunda categoría desde inicios del siglo.

La aludida dualidad entre pueblo y élite pensante se expresó en la propia característica del singular gobierno en armas, formado el 14 de septiembre en Santiago. Fue decidido por una improvisada asamblea de generales, pero instantáneamente estos entregaron la gestión a los civiles. Los generales conducían las masas, los civiles representaban el componente social de la clase media urbana por medio de la exigua minoría de capaces de ejercer funciones y de elaborar principios doctrinarios. Los tres presidentes salieron del generalato, pero sus ministros, los que gobernaban en realidad, fueron todos civiles pertenecientes al estamento de ilustrados de concepción liberal. Aunque se

formaron tendencias dispares y hasta contrapuestas entre los encargados del gobierno en sus distintas etapas, la función no se modificó en ningún momento. Tampoco variaron demasiado las concepciones enarboladas, a pesar de los momentos deslindados y los correspondientes énfasis doctrinarios.

Posible, en tal sentido, identificar momentos, en concordancia con la marcha de los eventos y de las concepciones impuestas a la acción de gobierno por los núcleos gravitantes de civiles y militares. Sus evoluciones no quedan en principio del todo evidentes en las narraciones. El núcleo de intelectuales-políticos de Santiago tuvo siempre la hegemonía, pero se sucedieron etapas no siempre del todo aclaradas. Durante la administración de José Antonio Salcedo, entre el 14 de septiembre de 1863 y su caída a inicios de octubre del año primero gravitó Benigno F. de Rojas, vicepresidente, sujeto muy capaz. Durante la gestión de Salcedo, por razones no establecidas, Rojas fue sustituido, primero por Ramón Mella y luego, cuando este enfermó, por Ulises Espaillat, fuera de duda la figura de mayor protagonismo en todo el desenvolvimiento de los hechos. El protagonismo de Espaillat se acrecentó durante la breve administración de Gaspar Polanco. Esta representó la culminación en todos los sentidos del esfuerzo bélico. Polanco destituyó a casi todos los ministros con lo que la excepción de Espaillat cobró mayor relieve, al confirmársele como vicepresidente.

Espaillat, burgués por antonomasia en aquellas condiciones, pero no menos patriota cabal, fue confirmado por Polanco y se hizo acompañar por otros, entre los cuales sobresalió Manuel Rodríguez Objío. Momento cumbre en lo militar fue el gobierno de Polanco, cuando se impulsó un giro decisivo a la guerra, tras una fase peligrosa de desfallecimiento. Entonces sobrevienen las expresiones más radicales en materia nacional. Pero en realidad hubo componentes comunes, a pesar de las heterogeneidades inevitables en un hecho de tales magnitudes,

líneas continuas invariables derivadas de las motivaciones de la causa nacional. El moderado burgués Espaillat sintonizó al parecer a perfección con la intransigencia nacional del guerrero feroz Polanco. Con Espaillat participaron otros, entre los cuales destacó Manuel Rodríguez Objío. Se manifestaron en el *Boletín Oficial*, que tomó otro carácter y pasó a ser un receptáculo de la radicalidad doctrinaria nacional y liberal. Con ellos dos una pléyade de figuras que en principio no hicieron elaboraciones, pero que fijaron posiciones decisivas como representantes del estamento gobernante: Julián Belisario Curiel, Máximo Grullón, Silverio Delmonte, Pablo Pujol, Genaro Perpiñán y otros.

Acaso como primera nota característica de la invariable especificidad doctrinaria de la Restauración se halla el reclamo de la unidad. Se tradujo en un reclamo funcional consustancial de la guerra. Había que sumar fuerzas como cuestión suprema en una confrontación bélica hartamente delicada de un pueblo pobre contra una potencia. El reclamo se sustentaba en la interpretación de que la Anexión de marzo de 1861 fue el resultado de la imposición de Pedro Santana y la camarilla que lo acompañaba en el Gobierno. La contrapartida no podía ser otra que la convocatoria a todos los demás a sumarse a la causa nacional. La unidad nacional se erigió en consigna primaria desde septiembre de 1863 hasta el final de la contienda.

Esa propuesta se sustentaba en una constatación acerca de la ruptura entre pueblo y gobierno hasta 1861. Se obviaba, como era de rigor, un examen acerca de las claves de reproducción del control del agrupamiento anexionista encabezado por Santana. De manera derivada del imperativo bélico, había que conceder una participación a todos los que se sumaran a la causa nacional, en la cual todos tenían las puertas abiertas.

En ese discurso oficializado, la viabilidad de la unidad nacional a su vez se derivaba de una naturaleza antropológica de los dominicanos, como sujetos aptos para la vida civilizada.

Se reconocían lazos de pertenencia común con España, como raíz de la condición civilizada, pero se achacaba una superioridad a la comunidad dominicana, sintonizada a tono con las doctrinas del siglo. Se presuponía como evidencia la superioridad del régimen republicano sobre el monárquico. Entre los dominicanos existía el principio de una capacidad de convivencia civilizada, concordante con los postulados en boga del liberalismo.

A su vez la capacidad de asunción de los principios de la civilización era el resultado de una naturaleza antropológica de los dominicanos como sujetos aptos para la vida de la civilización. El origen no podía ser otro que su raíz común con la comunidad española. Curiosamente, el reclamo de dignidad de un pueblo frente a la embestida colonialista provenía de la propia sustancia derivada de la comunidad de origen con antigua metrópoli. Esto no tenía nada de extraño, en la medida en que el liberalismo nacional continuaba siendo un patrimonio de las élites que se reconocían por compartir rasgos culturales y étnicos con los países civilizados.

Se derivaba el contenido absolutamente civilizado de la guerra de la Restauración. Se trataba de un esfuerzo pautado por los principios de la modernidad con contenido por tanto civilizado y apegado a una legalidad jurídica y ética. De por medio se afirmaba una sustancia civilizada del conjunto de la comunidad dominicana. Antes de 1861, se reiteró en los textos del *Boletín Oficial*, el país se enrumbaba hacia el progreso. El mito había de ser interiorizado como cuestión de principio frente al planteamiento anexionista, que auguraba la imposibilidad de realización por sí misma de la comunidad dominicana.

Lo anterior de todas maneras presuponía una nueva época en que se superaran las divisiones previas. La causa nacional posibilitaba superar los conflictos entre facciones políticas de la época republicana. El motivo de la independencia en esas

condiciones tornaba factible una unidad de nuevo tipo, basada en la primacía de los principios de la comunidad nacional por encima del faccionalismo político.

Subyacía una consideración antropológica acerca de la unidad de principios constitutivos de la comunidad dominicana. El liberalismo nacional requería borrar las diferencias socio-culturales en aras de la igualdad de derechos, la cual se extendía a planos determinantes de comunidad de contenidos étnicos. La postulada unidad política, como clave del triunfo de la causa nacional, se sustentaba en la comunidad nacional. El pueblo dominicano portaba los principios de la realización nacional. Se dejaba por el momento de lado el abismo entre pueblo y élites.

Con todo y postularse como perfectos liberales, los ideólogos de la Restauración encontraron la clave distintiva de la condición nacional en la hispanidad. La comunidad de origen, lengua, rasgos culturales y religión con España se elevaba al núcleo de la sustancia de los dominicanos como pueblo. Al menos durante los años de la contienda, los articulistas del órgano gubernamental no abundaron en consideraciones adicionales en este preciso terreno. Reclamaron que la relación con España no podía darse sino entre partes iguales, por ser los dominicanos una prolongación de la primera en América. No había atisbos de radicalismo doctrinario antiespañol, con lo que se formulaba un criterio discordante con la tónica popular de rechazo de lo hispánico que por lo menos manifestaban círculos combatientes de primera línea. Los autores españoles de textos sobre la temática, en especial Adriano López Morillo, prisionero en Jánico, indican el resentimiento contra España de los dominicanos, en proporción mayor los de piel oscura, impactados por el racismo de los dominadores. Por lo menos algunos de los intelectuales se deslindaron de esta alteración del sempiterno síndrome hispanista del común de los dominicanos. Para ellos

lo que estaba en juego era la confirmación de una sustancia que confería condición civilizada a la comunidad nacional.

Pero esto no pasaba de una construcción ideológica ya trillada entre todos los sectores dirigentes desde la misma época colonial. En realidad, los adalides radicales restauradores, al postular por una nueva época, preconizaba una modificación de parámetros culturales y existenciales. Este programa se plasmó en la propuesta de interacción entre educación y trabajo. Cabía educar al pueblo en principios por medio de la apertura de centros educativos. Pero, en el mismo orden, no menos cabía erradicar la vagancia, aunque en este momento no se la elevase a principio original del escollo ante el progreso. Podía haber matices, pero se insistió en diversos momentos en el requerimiento de poner al pueblo a trabajar. Procedía erradicar la propensión a la vagancia como rasgo consustancial de la existencia de la masa, aunque no se expresase taxativamente por obvias consideraciones de conveniencia. La incorporación al trabajo presuponia la instalación de talleres paralelos a escuelas. Una simbiosis entre instrucción y trabajo debía guiar la regeneración nacional. La convocatoria a la educación popular acaso fue una tónica original del esfuerzo doctrinario de la élite intelectual restauradora. No así la denuncia de la propensión a la holgazanería de parte de la población trabajadora rural, un tópico abierto por los hacendados en el siglo XVIII, como se observa en los debates que precedieron al Código Negro Carolino, y que fue recuperado desde ya por los primeros liberales, como lo hizo Antonio María Pineda, en artículos del *Correo Constitucional de Santo Domingo*, órgano de la Diputación Provincial, en los cuales identificaba como problema primario la existencia de una población liberta dispersa remisa a su incorporación a la disciplina laboral.

Detrás se hallaba la búsqueda del desarrollo económico que abriese el camino al progreso integral propio del capitalismo moderno. En esos días, todavía a tientas, se enarboló la

estrategia del desarrollo de la minería como el área que atraería inversiones de volúmenes de capital inexistentes en el país, proveería puestos de trabajo y posibilitaría arrancar la marcha del desarrollo moderno. En síntesis, los talleres estarían llamados a complementar los centros educativos con la misión de incorporar la población al trabajo disciplinado. Pero el aparato productivo que permitiría el acceso al progreso económico sería la minería. Con semejante aserto se tomaba nota de lo que acontecía en algunos países latinoamericanos. Se reconocía la conveniencia de ingreso de inversión extranjera ante la inexistencia de volúmenes de capital entre los círculos mercantiles del país.

Obviamente se trataba de elucubraciones individuales, pero con un indudable valor social, al grado de quedar recogidas en el *Boletín Oficial*. Los detalles pueden no tener especial significación. Lo sustantivo radica en que se perseguía hacer interactuar la realización del pueblo en la nación con el desarrollo al estilo de los países industriales. Con la Restauración se perseguía una reivindicación de la nación que abriese la senda del progreso, de un progreso factible en un estatus nacional, al grado de que de hecho fue interrumpido por la Anexión.

En otro plano, aunque no menos como requisito para el progreso, para estos pensadores, la comunidad étnico-nacional de los dominicanos tenía que expresarse en su unificación política. La nueva época que abría la Restauración, a juicio de todos ellos al parecer, requeriría como condición para ser auspiciosa la unidad, concepto con el que se aludía a la superación de las pugnas entre facciones políticas características del período posterior a 1844.

Esta unidad nacional se construía sobre la base de la contraposición de la totalidad del colectivo con Pedro Santana y el círculo gobernante que lo secundó en la materialización de la Anexión. Evidentemente tal consigna respondía a un requerimiento funcional de una guerra que se libraba en condiciones

en extremo difíciles. Pero subyacía no menos una convicción acerca de la factibilidad de una unidad compacta de todos por oposición a la exigua minoría antinacional. Ya se anunciaba incluso la propuesta puesta en boga por Espaillat una década después de la “Fusión”, con lo que aludía a la superación de las banderías opuestas, como clave de la realización de la república. Se partía del convencimiento de intereses comunes a todos en torno a la consecución del progreso, ante lo cual no podría sustentarse una divergencia significativa. Desde entonces se segmentó a la casi totalidad de la población de una minoría exigua de traidores. Aunque con matizaciones fundamentales tal reclamo acompañó en adelante el desenvolvimiento del liberalismo dominicano, al grado de que constituyó una de las claves interpretativas del proceso histórico decimonónico de José Gabriel García.

Se desprendió el corolario organizado de un partido político, a tono con lo que sucedía en los países avanzados. Desde muy pronto de la presidencia de José Antonio Salcedo, a pocos meses de iniciada la guerra, se formuló la postuló la existencia del Partido Nacional. Se perseguía compatibilizar el radicalismo liberal con la unidad nacional. En realidad, tal partido nunca existió, ni siquiera durante el breve régimen de Gaspar Polanco, cuando se elevó a categoría definidora del esfuerzo nacional en artículos mayormente redactados por Manuel Rodríguez Objío. La ficticia existencia de ese partido se prolongó durante las dos administraciones de José María Cabral y luego, de manera distinta, por medio de la acción de Luperón que culminó en su presidencia provisional de 1879.

Llama la atención la ausencia de principios concretos del Partido Nacional, a excepción de la afirmación de la unidad nacional por oposición a los traidores. Dejar las definiciones en tal plano debió obedecer a un criterio deliberado de inclusión, sobre la base probable del supuesto de que todos compartían

los imperativos del progreso económico, la clave de la realización nacional. No subyacía, pues, tanto una mirada ingenua de la realidad circundante, sino un convencimiento de que bajo el ejercicio de la soberanía nacional sería perfectamente factible la realización del pueblo a través del progreso.

Lo sucedido en el transcurso de la contienda desmentía ese aserto, con las divergencias que culminaron en la deposición del presidente Salcedo. Pero precisamente fue entonces que ganó cuerpo la proclama del papel del Partido Nacional. Salcedo ciertamente fue depuesto por su actitud conciliadora hacia los españoles, aunque también por su simpatía hacia Buenaventura Báez. Antes de ser derrocado circuló una hoja suelta en que se alertaba contra los manejos de este dirigente equiparado a Santana. El cuestionamiento explícito del baecismo, aunque no fuese insistente, formó parte de la compactación del colectivo político-ideológico de quienes dominaban las funciones principales del Gobierno Provisorio, lo que alcanzó máximo relieve como parte del radicalismo de la presidencia dictatorial de Gaspar Polanco, a partir de octubre de 1864.

Báez bien era catalogado subrepticamente dentro del anexionismo de los traidores, aunque no se insistió en ello, seguramente en aras de la unidad nacional. Pero las sucesivas caídas de Salcedo y, más adelante, de sus sucesores Polanco y Pedro Pimentel daban un mentís a la proclama de la unidad nacional perfecta.

La principal contrapartida de la unidad era el carácter civilizado de la contienda. Por esto se entendía invariablemente el apego a las normas prevalecientes en los países europeos. El Gobierno Provisorio y luego la Junta Superior Gubernativa aseguraban este contenido. Aunque de manera no explícita, se contraponía a impulsos surgidos en la propia guerra, puestos de manifiesto por los textos historiográficos de Luperón y Rodríguez Objío. La República se postulaba

conforme a los principios universalmente reconocidos del liberalismo. Esto tenía correlatos prácticos y doctrinario que sobre todo se expusieron durante la dictadura de Polanco.

Lo primero en este reclamo consistió en el respeto a la propiedad. Se enviaba un mensaje tranquilizador primeramente a los sectores dirigentes de las dos provincias del Cibao, donde el Gobierno restaurador ejercía sin obstáculos las prerrogativas de las funciones estatales. Rodríguez Objío hace mención oscuramente de una tendencia comunista durante la contienda. Algo por el estilo se desprende de los alegatos insistentes a favor de la propiedad en las proclamas gubernamentales, acaso una de las marcas de su apego civilizador. Significaba que la propiedad se respetaba con independencia de la posición política de cada quien. Hay señales de que el Gobierno se vio forzado, en el ejercicio de sus funciones, a detener acciones de confiscación de bienes de españoles y enemigos dominicanos. Esto pudo producirse por el protagonismo de jefes como Manuel Rodríguez (El Chivo) en Moca, junto a Pedro Salcedo (Perico), sindicado como bandido, y todavía más de Pedro Florentino, jefe de la línea del Sur durante los primeros meses. Se tomó nota de la defección de numerosos pobladores urbanos de Baní y Azua en reacción a la postura racialista y violenta de Florentino, quien quedó anatematizado en evidencia del desastre militar que conllevaba el radicalismo social que podía emerger en medio de las operaciones bélicas. En contraste, no parece que ningún integrante de los círculos gubernamentales se planteara beligerancia frente a los dominicanos “españolizados” y ni siquiera los propios residentes españoles de las poblaciones cibañas que decidieron permanecer en ellas. Por el contrario, Luperón mismo, juzgado como radical por los españoles, mientras preparaba la invasión al este y el sur, procuró en La Vega otorgar garantías a los dominicanos del estamento superior urbano que se habían solidarizado hasta entonces con el orden anexionista.

El énfasis en el carácter civilizado de la guerra nacional no se reducía, como es lógico, al respeto de la propiedad. Incluía el diseño de una sociedad deseable, que pretendidamente estaba en proceso de construirse antes de 1861. De por sí, en primer término, la existencia del Gobierno se amparaba en el reclamo de la legalidad, puesto que los generales que lo constituyeron trazaron las pautas de su correcto desenvolvimiento, a cargo de personas de preparación jurídica y profesional. Implicaba asimismo por derivación la legitimidad, en la medida en que el Gobierno representaba la voluntad del pueblo expresada en el terreno de las armas.

Y, por último, el contenido civilizado aludía a la búsqueda de la implantación de una sociedad moderna, a semejanza de la existente en unos pocos países de Europa occidental y Estados Unidos. Esto comportaba en primer término la democracia como marca definidora del sistema político, con lo que primordialmente se anunciaba con toda confianza el advenimiento de una nueva época. De otra manera, aseveraban los pensadores, el tremendo esfuerzo bélico carecía de sentido.

Si bien en los textos del *Boletín Oficial* se reconocía un estatus respetable a la comunidad española, se postulaba una superioridad de la dominicana por su condición republicana. La monarquía era percibida como un anacronismo, por lo que se exaltaban los regímenes americanos, aunque no se hacían señalamientos a las dos naciones europeas que simbolizaban la modernidad, Gran Bretaña y Francia, ambas con sistemas monárquicos, este no constitucional bajo el reinado de Louis Napoleon Bonaparte.

El Gobierno restaurador no obtuvo ningún reconocimiento diplomático, algo bien conocido, una dificultad para la proclama de legalidad que acompañaba la condición de apego a la civilización. Los territorios insulares eran todos colonias, Venezuela se hallaba sumida en convulsiones que siguieron a la

guerra federal, Estados Unidos prefirió abstenerse de tomar posición para no abrir un frente problemático ante el apoyo inglés y francés a los sudistas. Francia no disimuló el apoyo a España e Inglaterra únicamente al final de la contienda reconoció condición de fuerza beligerante al Gobierno de Santiago, motivo de júbilo desbordado. Las contadas intenciones solidarias, como la del representante mexicano en Estados Unidos, cayeron en saco roto.

En este aislamiento quedaba Haití, el único Estado de las Antillas, además de vecino vitalmente interesado en el fracaso de la Anexión. Pero, tras las amenazas españolas en junio de 1861, el presidente Fabre Geffrard retiró el apoyo a los dominicanos. Ciertamente se permitió el tráfico comercial fronterizo, cuestión vital por facilitar la salida del tabaco, producto en que se sustentaba la causa restauradora, dado el bloqueo marítimo impuesto por España. Ante el aislamiento internacional, que agravaba los avatares de la guerra, se procuró invariablemente obtener el respaldo de Haití. En más de un texto se presentó al régimen político allí existente desde 1859 como adecuado a perfección a los parámetros de la democracia moderna, prácticamente un modelo a seguir, entre otras cosas por su postura nacionalista. Se llegó a clamar por el ingreso de combatientes haitianos, algo descartado por el presidente desde el fracaso de la expedición de Francisco del Rosario Sánchez a mediados de 1861, en la cual participaron combatientes haitianos a título individual. Tal empatía hacia Haití se acrecentó con motivo de la iniciativa diplomática con motivo de la visita del oficial español Van Halen a Port-au-Prince, que dio lugar a un documento redactado en ese lugar y aceptado por el Gobierno Provisorio en su etapa nacionalista más radical, en el cual se elevaba una súplica a la reina Isabel II. Fue motivo de satisfacción que, de hecho, con esta mediación diplomática oficiosa, acompañada de la visita de los altos funcionarios Ernest Romain y D. Doucet, se interpretó que Haití reconocía la soberanía

del Estado dominicano. La admiración al país vecino formó parte de la corriente radical, a pesar de sus sesgos controlados durante la guerra.

La búsqueda de legitimidad se manifestó en otros terrenos. Puesto que se afirmaba el carácter civilizado del proyecto nacional dominicano se tornó de rigor explicar los motivos de la ruptura con España más allá de las críticas al ordenamiento atrasado de la monarquía. La justificación de los motivos de la insurgencia concentró uno de los esfuerzos ideológicos que acompañaron la insurgencia. Las explicaciones más sistematizadas que se formularon con posterioridad, incluida la de Alejandro Angulo Guridi, la más lúcida y abarcadora de todas, en realidad no hicieron más que continuar las ya fijadas por el Gobierno restaurador por medio de diversas proclamas y artículos en el *Boletín Oficial*. Se estableció una incompatibilidad de un orden de libertades de cuarenta años con una monarquía extranjera. Al situarse el conflicto en ese terreno se reconocía un estatus civilizado y digno a la comunidad dominicana, cuya existencia hacía incompatible un orden basado en la opresión, máxime si tenía una connotación nacional y étnica. Se obvió en lo fundamental la crítica liberal a la cultura popular, aunque se manifestaba solapadamente en las propuestas de la integración al trabajo ordenado y en el desarrollo de la educación, que tendría por cometido desarraigar hábitos nocivos y creencias supersticiosas, incompatibles con la condición civilizada otorgada al colectivo nacional. El trato discriminatorio hiriente fue acaso el motivo mayormente esgrimido, que se extendía a un orden basado en la opresión abierta. Se reiteró que los dominicanos únicamente podían aceptar a los españoles como iguales, nunca como superiores, como en la práctica lo presuponían en el ordenamiento anexionista. Se agregaba la motivación económica de las contribuciones extraordinarias que dio lugar al empobrecimiento de la generalidad de la población y a perjuicios

sobre todos sin excepción, en lo que debe sobresalir el de los sectores burgueses urbanos, pese a la disposición anexionista que exhibieron en 1861.

Comenzó a formularse una reivindicación histórica, que no tuvo demasiada continuidad, uno de cuyos componentes principales fue la exaltación de Francisco del Rosario Sánchez como una suerte de padre de la patria, por haber sido el ejecutor de la ruptura con Haití en 1844 y el iniciador de la lucha armada hasta su cadalso glorioso en San Juan. En verdad la narrativa histórica pecó de pobre y dispersa, pero se inició una preocupación de búsqueda en las luchas gloriosas del pasado de clave de dignidad y legitimidad.

Pese a la reivindicación del pasado, paralelamente el colectivo de intelectuales y políticos que ejercían las funciones gubernamentales partían de la proclama de que con la guerra nacional se abría una época de plasmación plena de realizaciones. No había dudas aparentes acerca de la certeza de un porvenir brillante, sintetizado en el logro de la modernidad plena. El propósito explica la centralidad acordada a los asuntos económicos en las ejecuciones gubernamentales y en las reflexiones de los pensadores.

Ni más ni menos, las urgencias de sostener una guerra en condiciones altamente desfavorables se acompañaron de la afirmación de los principios de la economía política capitalista. Al parecer quien mayor incidencia tuvo en estas elaboraciones fue Benigno Filomeno de Rojas, el primero y el último de los vicepresidentes, a pesar de que con él había motivos de querrela no claramente explicitados. El hecho es que no aparecieron divergencias significativas en el carácter burgués del proyecto nacional de los próceres intelectuales.

Ya se ha visto el peso concedido a la conexión formulada entre educación y trabajo, plasmada simultáneamente en la fundación del mayor número de escuelas, como efecto se hizo

durante los meses finales de la guerra, y la de talleres de trabajo, iniciativa que alcanzó una concreción similar, aunque había precedentes desde décadas previas. La clave para un porvenir auspicioso era ni más ni menos que el sometimiento de la población trabajadora a cánones disciplinarios. Pero en diversos escritos se tomó nota de que esto no bastaba, por lo que uno de los articulistas propuso en reiteradas ocasiones la panacea de la minería como fuente de generación de un volumen de riquezas que sustentase la marcha hacia el progreso. El autor reconocía la insuficiencia de recursos en los medios mercantiles, por lo que derivaba la exigencia de contar con capital extranjero para empresas de la magnitud requerida.

Más importante en lo inmediato fue la resolución de las urgencias perentorias de la guerra. Supuso el designio en la práctica, sin formulación expresa inicial, de la captación del grueso de la cosecha de tabaco. Se partía del reconocimiento de que este género de exportación era el único que proveía recursos para la adquisición de armamentos, municiones y otros bienes para el esfuerzo bélico. La guerra se pudo acompañar de un ordenamiento gubernamental y se sustentó en tropas con un mínimo de formalidad castrense gracias a la exacción practicada sobre el campesinado. En realidad el sacrificio fue común a toda la población, pues los mismos altos funcionarios subsistían gracias al abastecimiento de alimentos en predios cercanos a la ciudad. Se acudió al monopolio del producto, a su pago a los cosecheros con papel moneda por definición sujeto a devaluación y al cobro de una exagerada tasa arancelarias. Ambos instrumentos generaban repugnancia en los pensadores a cargo del gobierno, hasta que la marcha de los eventos les concedió razones en considerar esos instrumentos contraproducentes para el objetivo del progreso. El monopolio tuvo que ser abolido y se redujeron los márgenes fiscales sobre el producto. Se desarrollaron capítulos poco conocidos

todavía de resistencia de los cultivadores a las duras prescripciones impositivas de un esfuerzo bélico. Aun así, se tuvo que sostener el empleo de procedimientos coercitivos, como la factoría del tabaco que siguió al fracaso del monopolio por efecto de los mecanismos de su vulneración por parte de los campesinos.

Ante esto se produjo un productivo intercambio de reflexiones. En una de ellas, como todas sin firma, aparecida en el *Boletín Oficial* número 28, de 26 de mayo de 1865, se reconoce que el Gobierno restaurador tuvo que acudir a medidas económicas contraproducentes para la consecución del progreso, pero que fueron inevitables para el sostenimiento del esfuerzo bélico. Además de los procedimientos monopólicos y de elevados impuestos, este articulista centró su examen en la cuestión monetaria. En efecto, el Gobierno restaurador desde el principio tuvo que continuar la práctica de las administraciones dominicana, pues de otra manera no se hubiera ningún otro medio para sostener la guerra, al igual que había sucedido después del 27 de febrero para resistir las embestidas haitianas. El reto en adelante consistía en abandonar esa práctica, puesto que de otra manera no se entraría en la senda del progreso. A la vista se hallaba que en esos meses se produjeron dos emisiones de papel moneda por diez millones de pesos cada una. Se registraba en otros textos que, de todas maneras, no se había contratado ningún empréstito, a pesar de que hubo tentación de hacerlo, por ejemplo, con un comerciante de Bahamas.

Las disensiones no tardaron en aparecer en cuestiones económicas, como en otras. Una de ellas fue con motivo de las solicitudes de concesiones al británico Theodore Stanley Heneken, ministro del Gobierno de Santiago, relacionado íntimo a Rojas. Heneken hubo de afrontar cuestionamientos severos a sus planes de trazado de varias líneas férreas, de lo cual el Estado se hacía garante ante los inversionistas.

A pesar de la seguridad del articulista, probablemente Rojas mismo, de que habría medios para saldar las deudas de las emisiones y no recurrir más a ellas, las cuestiones económicas generaron divergencias crecientes, que fueron características de los años siguientes. El Estado tenía que funcionar, pero carecía de recursos tributarios. La emisión de moneda era un expediente insoslayable, pero generaba inestabilidad de precios que perjudicaba a todos los agentes económicos. No podía en particular haber sintonía de propósitos entre un Estado muy débil y la cúspide burguesa urbana.

Tales dilemas económicos no fueron sino parte de un paquete de divergencias crecientes en los propios medios restauradores portadores de la idea del Partido Nacional. Las desavenencias comenzaron contra el presidente Salcedo por la forma en que condujo la guerra, su tentativa de claudicar ante los españoles y propiciar subrepticamente el retorno de Báez. La dictadura radical de Polanco, apoyada por el núcleo principal de pensadores, resultaba intolerable para la mayoría de generales, apoyados por una porción desplazada de civiles, que no tardaron en derrocar. Pedro A. Pimentel, el tercer presidente, tuvo una duración efímera a causa de las divergencias en materia regional, exacerbadas por el intento de continuidad de la hegemonía cibaëña y la constitución de un núcleo sureño de generales, encabezados por José María Cabral y Eusebio Manzueta, los que habían logrado los últimos éxitos militares precisamente como parte de la beligerancia del presidente Polanco.

Estos conflictos de intereses y de visiones contrastaban con la reiterada proclama de unidad nacional como clave para un futuro promisorio de progreso con autodeterminación. Sus motivos no pudieron ser dilucidados adecuadamente durante la contienda. Más bien aconteció lo contrario: los pensadores constituidos en generación persistieron en sus certezas, a pesar de las dificultades que impedían la plasmación de sus

propuestas. La agenda ideológica que acompañó la Restauración se prolongó como nota característica de los tiempos ulteriores. Todos los adalides de la causa nacional emergieron en lo fundamental durante la contienda. Algunos desaparecieron con prontitud, como Rojas, enfermo crónico que falleció en el mismo 1865, o Rodríguez Objío y Julián Belisario Curiel, fusilados por órdenes de Buenaventura Báez. Pero otros persistieron, de lo cual sobrevino el protagonismo de Luperón, acaso el único jefe militar armado de la condición de intelectual y dotado de la mayor conciencia histórica entre sus pares. Algunos protagonistas del liberalismo no tuvieron participación en la guerra, como García, pero la siguieron en detalle. Otros fueron guerreros y solo después incursionaron en asuntos intelectuales, como Mariano Cestero y Francisco Gregorio Billini. El hecho es que todos tenían la factura de restauradores. La contienda fue motivo de compactación de una generación y de sus elaboraciones. Gracias a semejante telón de fondo, no renunciaban a la certeza de la realización nacional en condiciones de autodeterminación mediante el progreso. Siguiéron capítulos productivos alrededor de las disquisiciones para hacer realidad los principios dentro de los contornos de la vida dominicana. Se recompusieron los grandes males del conservadurismo anexionista, el autoritarismo y apareció el caudillismo, propio del ámbito de los jefes guerreros. Pero los intelectuales se mantuvieron en una tesitura incólume de la certeza de sus principios con lo cual advino una generación decisiva que marco la tónica de los años siguientes.